

La credibilidad de los médicos frente a la del Gobierno Nacional

Sara Cuevas Velásquez

Los que escogimos la Medicina como profesión, somos conscientes que su ejercicio implica un compromiso individual y colectivo con las personas y con la sociedad en la que nos desenvolvemos, lo que nos impone deberes y responsabilidades, lo que nos impone deberes y responsabilidades ineludibles que se encuentran reglamentados en el Código de Ética Médica.

Sin embargo, como en toda actividad humana la práctica médica depende de numerosos factores que van más allá de sus capacidades, pericia y dedicación profesional. Si bien es cierto que entre los médicos están presentes cualidades y defectos no es menos evidente que en la cotidianidad del ejercicio profesional pueden haber algunos casos de mala práctica y pueden ser perfectamente tipificados, pero no todos ellos pueden ser atribuibles a negligencia médica.

Al pan, pan y al vino, vino, hay normas para sancionar a quienes las transgreden, tengan el título que tengan. Pero, ¿quién o quienes sancionan la perversa negligencia estatal que daña irremediablemente a la ciudadanía en materia de salud?

Antes que negligencia en la práctica médica hay negligencia administrativa atribuible a las funciones públicas del sector. Para empezar, debemos señalar que las instituciones de salud no están dirigidas por los profesionales más idóneos, salvo honrosas excepciones, y es fruto del cuoteo político. Esto trae consigo una cadena de designaciones y acciones en el ámbito de la salud y su administración generando improvisación, nepotismo y corrupción.

Más aún, el Presupuesto General de la Nación del presente año y del anterior también, privilegia el gasto en seguridad y minimiza el de salud. Parece un tema demasiado gastado por lo viejo, sin embargo, por cada 100 Bolivianos presupuestados 46 Bolivianos son empleados en asuntos militares y policiales, frente a sólo 20 Bolivianos dedicados a salud, educación y vivienda. Mientras el Ministerio de Salud tiene menos de 43 millones de Bolivianos para cubrir sus planillas de sueldos, el Ministerio de Defensa cuenta con más de 708 millones para el mismo rubro. Aquí la pericia profesional de los médicos trastabilla.

Todos saben -pero a pocos parece importarles- que Bolivia continúe catalogado como un país con la peor salud de América Latina, con una esperanza de vida de 53,3 años, muy por debajo del promedio regional (60 a 69 años), según el último informe de la OMS.

La niñez boliviana es considerada como una de las más desprotegidas en Latinoamérica, puesto que más de 25.000 niños/niñas mueren anualmente por causas prevenibles antes de llegar a los 5 años y la mitad de este nivel etéreo sufre de anemia por desnutrición; aproximadamente 700.000 niños/niñas no asisten a la escuela y la mayoría del área rural no logra terminar el ciclo primario. Saque Ud. conclusiones sobre la magnitud de la "negligencia médica".

Más problemas

Entre los mayores problemas sanitarios del país se debe mencionar la abismal desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Las diferencias económicas causan esta inequidad y son los gobiernos que mucho hacen para honrar esta alarmante desigualdad, por lo dicho líneas arriba, más dinero a la seguridad y menos a la salud. Esta forma de presupuestar el dinero del país significa que haya más uniformados amparados en las planillas que médicos con ítemes.

Bajo estas condiciones, los médicos bolivianos se obligan a brindar atención a 10 o más pacientes por hora cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no más de cuatro. La carencia de ítemes se agudiza en relación directa al crecimiento vegetativo de la población, disminuyendo la calidad y calidez en la atención. En estas condiciones, el médico atosigado de pacientes, no puede practicar la prevención ni la educación en salud.

Escapa a la responsabilidad de los médicos que en el país se practique una medicina esencialmente curativa, que no se invierta recursos ni esfuerzos para mejorar la salud de la población, sus condiciones de vida, de educación. A qué administración le interesa que estos derechos sean un lujo inalcanzable para la mayoría nacional?



Se sostiene que el 20 por ciento de la población boliviana (dos millones de habitantes) tiene seguro social atendidos por tan solo 2.119 médicos. A la par el Estado mantiene una deuda histórica (por morosa) de aproximadamente 70 millones de dólares. Esta obligación incumplida está asfixiando a la CNS.

Más de tres millones de unidades de rifampicina y más de 10 millones de comprimidos de isoniazida - para el tratamiento de la tuberculosis- han expirado en los almacenes de las instituciones sanitarias por falta de programación de actividades, un hecho enteramente atribuible a las autoridades en salud.

No podemos olvidar que a raíz de la compra de vacunas con sobreprecio por 143.600 dólares, junto a otros casos de corrupción e ineficiencia los organismos internacionales y países amigos retiraron su apoyo a los programas de salud nacionales. Estos actos que ahuyentan la cooperación internacional aún se mantienen en la impunidad.

La llamada "negligencia médica", un término utilizado como taparrabos por las autoridades, no puede esconder la mala infraestructura sanitaria, la carencia de material y equipamiento médico, la escasez e inaccesibilidad a los medicamentos.

Por supuesto que los médicos están lejos de la impunidad, son responsables de sus actos, sin embargo, es imperioso que a la hora de evaluar de esta vital profesión exista objetividad. Es hora que las instituciones y el Estado cumplan con sus obligaciones respecto a la salud de la población, porque está claro que la negligencia está en el ámbito estatal ■